

Venezuela: una revolución en crisis

Román D. Ortiz

Tres años después de su llegada al poder, el experimento político encabezado por el presidente Hugo Chávez y su revolución bolivariana presenta síntomas de agotamiento. En el frente político, la marcha masiva opositora del pasado 23 de enero ha puesto de manifiesto un aumento de la contestación antigubernamental. Al mismo tiempo, las magnitudes macroeconómicas apuntan a la posibilidad de una crisis fiscal y una quiebra del tipo de cambio que podrían tener consecuencias demoledoras sobre el nivel de vida de los venezolanos. Finalmente, en el frente externo, las filtraciones sobre los vínculos de sectores del gobierno venezolano y la guerrilla colombiana hacen poco por mejorar las ya deterioradas relaciones de Caracas con Bogotá y Washington. Este panorama tan poco halagüeño para el presidente Hugo Chávez suscita dos interrogantes: ¿cómo se ha llegado a este escenario de crisis? y, sobre todo, ¿cuál puede ser el desenlace de la presente crisis?

Para entender la trayectoria reciente de esta república caribeña de casi veinticinco millones de habitantes, es necesario volver tres años atrás para ver cuáles fueron las fuerzas que condujeron al arrollador triunfo electoral de Hugo Chávez en febrero de 1999 y con qué programa alcanzó la jefatura del Estado este antiguo teniente coronel de paracaidistas. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1999 en Venezuela otorgaron a la candidatura de Chávez un arrollador triunfo con un 56,20 por 100 de votos válidos emitidos. Este caudal de votos se vería todavía acrecentado tras los comicios presidenciales de julio de 2000 donde Chávez cosechó un 59,75 por 100 de votos. Al menos tres factores explican la capacidad del ya entonces presidente para concitar tan amplio respaldo. Para empezar, se trataba de una reacción al enorme cansancio de los venezolanos por tres décadas de bipartidismo que había situado a la cabeza del país alternadamente a los socialdemócratas de Acción Democrática y los socialcristianos de COPEI gracias a la práctica generalizada del clientelismo y la corrupción. Unos precedentes que hicieron al electorado extraordinariamente permeable a la retórica antipolítica y antipartidista de Hugo Chávez. Por otra parte, el discurso populista del ex-militar conectó con las expectativas frustradas de

millones de venezolanos que habían crecido en la paradoja de que su país disfrutaba de una riqueza supuestamente ilimitada; pero su nivel de vida empeoraba de forma imparable desde mediados de los años 70. Esta aparente contradicción hizo creíbles las promesas de Chávez que culpaban al mal gobierno y la corrupción de ser los únicos responsables de las miserias de Venezuela y prometían el bienestar perdido a la población una vez que un nuevo sistema político justo y limpio fuese puesto en pie. Finalmente, la vinculación del ideario «chavista» a la figura de Bolívar hizo más atractiva esta oferta electoral para muchos votantes que asociaban al prócer con el proyecto de una república venezolana convertida en un modelo de justicia y libertad hacia el que mirase toda América Latina.

Pero si éstas fueron las razones que empujaron a millones de venezolanos a votar por Chávez, el ex-militar llevó consigo al Palacio de Miraflores un proyecto ideológico muchos de cuyos rasgos chocaban con la cultura política tradicional de su país o resultaban contradictorios con las aspiraciones de sus votantes. El verdadero trasfondo ideológico de la «revolución bolivariana» de Hugo Chávez ha sido objeto de polémica antes y después de su acceso a la presidencia. Muchos analistas han sostenido que su mensaje «bolivariano» ha sido únicamente un reclamo para conseguir el sustento popular para conservar el poder. Pero lo cierto es que, por difusos que parezcan sus planteamientos, el presidente venezolano llegó al gobierno con un ideario que ha determinado su acción hasta el punto de condenarle a enfrentarse con amplios sectores de la sociedad.

Dentro de este cuerpo doctrinal que ha presidido su trayectoria política, Chávez situó como principio básico la crítica a los fundamentos de la democracia liberal. De hecho, las denuncias de la corrupción y la manipulación política de la etapa del bipartidismo venezolano fueron utilizadas como argumentos para realizar un cuestionamiento general de las instituciones políticas liberales. Desde su punto de vista, partidos y sistemas de representación eran instrumentos al servicio de oligarquías políticas para torcer la voluntad popular. De hecho, Chávez llegó a ser tan claro sobre estos planteamientos como para afirmar que «una democracia representativa no es verdaderamente buena» para Venezuela. En la mejor tradición de los populismos latinoamericanos, la ideología bolivariana propuso como alternativa una relación sin intermediarios del líder con las masas, combinada con ciertas formas de democracia directa. Algunas de estas ideas alternativas se proyectaron sobre la elaboración de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, que adquirió un tono fuertemente presidencialista, creó un parlamento unicameral, sustituyó a los tres poderes tradicionales por un quinteto (ejecutivo, legislativo, judicial,

ciudadano y electoral) e introdujo elementos de democracia directa como la posibilidad de revocar por medio de referendos a los cargos electos.

En cualquier caso, pese a que estos planteamientos fueron bien recibidos en el contexto de la crisis del bipartidismo venezolano, a más largo plazo, las críticas a la democracia liberal chocaron con tradiciones fuertemente arraigadas entre la opinión pública venezolana. El juego de los grandes partidos venezolanos inaugurado con el pacto de Punto Fijo en 1958 estuvo cuajado de fallas, ineficiencias y corruptelas; pero supo dejar en el electorado del país caribeño un gusto por el debate político abierto y el disfrute de las libertades públicas. De hecho, incluso con la clase política tradicional todavía completamente desprestigiada, los resultados de una encuesta del grupo Consultores 21 publicados por el diario venezolano *El Nacional* en mayo de 2000 señalaba que un 52 por 100 de los jóvenes simpatizaba con alguna formación política. En este contexto, el discurso antiliberal de Chávez cosechó éxitos iniciales; pero su monopolización de las instituciones, sus esfuerzos por controlar los medios de comunicación, sus modales autoritarios en la conducción del gobierno y su crispación del debate público encontraron el rechazo de un sector siempre creciente de la población con una cultura política moldeada por cuatro décadas de democracia.

Los planteamientos antiliberales del presidente Chávez también se manifestaron en el papel que otorgó a las fuerzas armadas dentro de la reformulación del régimen político acometida con la constitución de 1999. Frente a la posición apolítica tradicionalmente otorgada a las fuerzas armadas en las democracias, Chávez apostó por un estamento castrense ideologizado situado en el corazón del Estado como motor de su revolución. La politización de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) venezolanas era coherente con la trayectoria política del propio Chávez, que había participado en la creación del Movimiento Bolivariano Revolucionario Doscientos (MBR-200) como una célula de conspiración militar que estuvo en la base de la intentona golpista contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992. Con estos antecedentes, el ideario «chavista» se proyectó en la Constitución bolivariana otorgando a las FAN una cierta capacidad de deliberación política y un amplio margen de autonomía frente a las autoridades civiles. Este nuevo papel político vino acompañado de la modificación de los programas de educación militar con el fin de otorgar espacio a la enseñanza de la «ideología bolivariana». Al mismo tiempo, se expandieron sus misiones castrenses al otorgar a las FAN un papel clave en la gestión de la administración pública y el desarrollo nacional. Como parte de este esquema, una buena cantidad de mandos en activo o retiro fueron situados en posiciones clave dentro de la estructura estatal

venezolana. Al mismo tiempo, el gobierno Chávez lanzó los llamados Planes Bolívar, que detrajeron recursos de los municipios y estados venezolanos para asignárselos a las fuerzas armadas con el fin de que desarrollasen programas de obras públicas, sanidad, educación, etc.

Este protagonismo político otorgado por la doctrina «chavista» al estamento militar encontró una fuerte resistencia dentro de las FAN. Parte de esta oposición fue suscitada por aspectos concretos de las políticas de seguridad impulsadas por la administración Chávez. Así, por ejemplo, el proyecto gubernamental de impulsar la unificación de las distintas ramas del aparato de defensa venezolano suscitó fuertes reticencias de los servicios de menor tamaño como la Armada o la Fuerza Aérea ante el temor de ser situados bajo la hegemonía del más numeroso e influyente Ejército de Tierra. De igual modo, la idea contemplada por algunos sectores del régimen chavista de disolver la Guardia Nacional suscitó un profundo malestar dentro de este cuerpo responsable del mantenimiento del orden público. En cualquier caso, más allá de estos choques sobre cuestiones concretas, lo cierto es que el enfrentamiento entre un sector mayoritario de las FAN y el gobierno Chávez se nutrió de las profundas diferencias que separaban la cultura militar tradicional venezolana del modelo militar impulsado por la revolución bolivariana. Durante cuatro décadas, las fuerzas armadas de Caracas habían sido educadas en el sometimiento al poder civil y la dedicación profesional a la defensa nacional. De hecho, las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992 fueron episodios condenados al fracaso desde su mismo principio en la medida en que contaron con el repudio mayoritario del estamento castrense. En este contexto, las propuestas «chavistas» de politizar el cuerpo de oficiales y convertir las FAN en el motor de la transformación social y económica del país encontraron la oposición de amplios sectores militares que veían estos cambios como una amenaza a los fundamentos de su institución.

El proyecto bolivariano también incluía cambios en la economía que provocaron fuertes resistencias en amplios sectores sociales. En términos generales, los planteamientos económicos del régimen fueron determinados por una serie de puntos de vista políticos que combinaban populismo y nacionalismo. El gobierno de Chávez apostó por sobrevaluar el bolívar frente al dólar de forma que el consiguiente abaratamiento de las importaciones permitiese contener una inflación que perjudicaba especialmente a los sectores populares, sin necesidad de introducir reformas económicas con altos costes sociales. Al mismo tiempo, el régimen impulsó políticas de redistribución de la renta que incluían limitaciones sobre los derechos de propiedad y controles sobre la actividad económica privada. El ejemplo

más visible de este tipo de iniciativas fue la llamada «Ley de Tierras», que prevé la expropiación y el reparto de los latifundios no explotados adecuadamente en opinión de los funcionarios gubernamentales. Paralelamente, el «chavismo» apostó por una vuelta al proteccionismo que permitiese el resurgimiento de la producción agrícola e industrial nacional orientada hacia el mercado interno. Como parte de este esquema de política económica, el Estado asumía un papel protagónico como instrumento para liderar los cambios necesarios para convertir la economía venezolana en un instrumento para el logro de la justicia social y el engrandecimiento nacional. En este sentido, la revolución bolivariana impulsó un crecimiento constante del gasto en los periodos fiscales 1999 (23%), 2000 (23%) y 2001 (29%). Estos fondos permitieron una expansión del gasto público en salarios y subvenciones. Además, se impulsaron programas intensivos de obras públicas y asistencia social a través de los mencionados Planes Bolívar y se concibieron macroproyectos de desarrollo como la activación económica del eje Orinoco-Apure. Detrás de este tipo de iniciativas, la eficiencia económica era subordinada a criterios estrictamente ideológicos. Los Planes Bolívar eran un esfuerzo por utilizar fondos públicos para conseguir la adhesión de las clases populares a la revolución a través de la puesta en práctica de programas sociales gestionados que beneficiasen directamente a estos sectores. El desarrollo del eje Orinoco-Apure representaba la traducción económica de un viejo proyecto estratégico que pretendía asegurar el control del interior de Venezuela a través del poblamiento y la modernización productiva de estas cuencas fluviales.

Este esquema económico estuvo sostenido inicialmente por la espectacular bonanza petrolera que llegó a situar el barril de petróleo por encima de los 25 dólares a lo largo de los años 1999 y 2000. Sin embargo, el debilitamiento de la demanda de crudo durante el año 2001 asestó un fuerte golpe a los ingresos en divisas del Estado venezolano. Esta reducción de los ingresos tuvo un doble efecto. Por un lado, incrementó el déficit público, lo que tendió a establecer un techo sobre la capacidad del gobierno para continuar con la expansión del gasto. De hecho, la carga del déficit mejoró levemente entre 1999 y 2000 al reducirse del 2,6% al 1,7%; pero se agravó claramente en 2001 con una escalada hasta el 4,6%. Al mismo tiempo, redujo el flujo de divisas, lo que restó credibilidad a la capacidad del gobierno para mantener un dólar sobrevaluado. El consiguiente debilitamiento del tipo de cambio del bolívar frente al dólar amenazó con encarecer las importaciones y poner en peligro el control de la inflación. Un riesgo que obligó a un incremento de los tipos de interés destinado a apuntalar el tipo de cambio y evitar el derrumbe de la moneda nacional.